

*cio Allamirano.—Luis Velazquez.—Enrique Landa, secretario.*

Son copias. México, Marzo 5 de 1875.  
—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Ventura Ortiz, contra el C. Jefe político de Purísima del Rincón, que lo ha juzgado y condenado á la pena de muerte.*

*Pedimento del C. promotor Escal.*

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, dice: Ventura Ortiz promovió el presente recurso de amparo, contra el Jefe Político de Purísima del Rincón que lo juzgó y condenó á la pena de muerte, violando en concepto del quejoso las garantías individuales consignadas en las cinco fracciones del art. 20, y en los arts. 21 y 23 de la Constitución Federal.

El Jefe Político de Purísima del Rincón informó que el quejoso no había sido juzgado por el delito de rebelión como afirmaba en su primer escrito, sino como salteador y con arreglo á la ley de 18 de Mayo de 1871. A este informe no se acompañó ningún justificante, por lo cual supuesta la contradicción entre el escrito de queja y este informe, el juzgado ordenó se recibiera el juicio á prueba, en cuyo término se agregó á las actuaciones el testimonio del proceso que motiva la interposición de este recurso de amparo.

El que suscribe, ha examinado detenidamente el proceso instruido á Ventura Ortiz que no se compone sino de las declaraciones de ocho testigos, dicen, apoyados en la voz pública, que el procesado es salteador. Refieren algunos robos de los que lo supu-

nen autor, pero ninguno de ellos aparece probado legalmente; se certificaron varias denuncias de robos que se atribuyen al quejoso, pero ninguno de ellos cuidó la autoridad política que formó el juicio, de hacerlos constar de una manera legal. El único fundamento de la sentencia es, que el reo perteneció á una gavilla de malhechores, pero como antes se ha dicho, no está probada la existencia de uno solo de los delitos que se dice cometió dicha gavilla.

En el proceso en consecuencia, falta la prueba de la existencia del delito, que para la aplicación de cualquiera ley, y principalmente de la ley que se aplicó á Ventura Ortiz, es tan necesaria que sin la comprobación del cuerpo del delito, no puede formarse un proceso.

La Suprema Corte de Justicia en casos análogos al presente, ha resuelto que el examen y la valorización de las pruebas que resulten contra el procesado son de la exclusiva competencia de las autoridades políticas que están encargadas de la aplicación de la ley de suspensión de garantías para los salteadores y plagiarios, pero cuidando siempre que aparezca probada la existencia del delito de asalto y plagio.

En el caso que el Juzgado tiene que resolver, no está demostrada la existencia de ninguno de los hechos que refieren los testigos que declararon en el proceso, y en consecuencia, no aparece demostrado tampoco si el quejoso debió ser juzgado conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, por cuyo motivo el Promotor fiscal es de opinión que el juzgado debe concederle el amparo que solicita.

Guanajuato, Octubre 23 de 1874. —*José Aguilar y Córdova.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guanajuato, 13 de Noviembre de 1874.

Visto el presente juicio de amparo promovido por Ventura Ortiz, contra el C.

Jefe Político de Purísima del Rincón, que lo juzgó y sentenció, condenándolo á la pena de muerte, como salteador, con violación de los arts. 20, 21 y 23 de la Constitución, según expone el agraviado: Resultando que en Abril de 1872 fué procesado el quejoso conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, que suspendió para los salteadores y plagarios algunas garantías individuales:

Considerando: que la misma ley en su art. 89 concede facultad á las autoridades políticas para juzgar sumaria y verbalmente á los expresados reos, y para imponerles la pena capital, si fuere probado el delito que se les imputa:

Considerando: que en virtud de esta facultad, la Jefatura de Purísima del Rincón, ha obrado dentro de la órbita de sus atribuciones, al proceder contra Ventura Ortiz, por los diversos actos de asalto y robo que le atribuyen los testigos examinados en la causa respectiva:

Considerando: que la mencionada autoridad no ha violado en la persona de Ortiz las garantías que proclaman los arts. 20 y 21 del Pacto Federal; porque estas garantías están suspensas para los salteadores, conforme al art. 19 de la citada ley de 18 de Mayo.

Considerando: que no es necesario que esté justificado previamente que un individuo es salteador para que pueda ser juzgado por una autoridad política, y privado temporalmente de los derechos que sancionan los arts. 20 y 21 constitucionales, sino que basta que haya contra el presente reo indicios de cualquiera naturaleza, que lo acusen como salteador, para que, durante el juicio se tengan como suspensas para el procesado, las garantías que dichos artículos consignan, puesto que de otra manera sería necesario juzgar dos veces á un individuo por el mismo delito; la primera vez, para averiguar en juicio ordinario, si es salteador y si goza ó no de todas sus garantías; y la segunda, para que se le aplicara la pena de los salteadores en el juicio extraor-

dinario y por el tribunal especial que establece la ley privativa dada para esta clase de delinquentes:

Considerando: que el quejoso no tiene derecho para exigir que se observen en su favor las formalidades que á todo acusado garantiza el art. 20 de la Constitución, ni para reclamar, que con arreglo al art. 21 lo juzgue la justicia ordinaria, supuesto que está indicado de los delitos de robo y asalto y, por esta razón, privado de los derechos que los dos preceptos constitucionales citados, aseguran al hombre.

Considerando: que las autoridades políticas carecen de facultad para imponer á los salteadores la pena del último suplicio, cuando no está probado el cuerpo del delito; según se infiere del cuarto período del art. 39 de la ley de 18 de Mayo de 1871.

Considerando: que los hechos de asalto y robo de que se hace cargo el quejoso no aparecen plenamente comprobados en el acta que se le instruyó, en la cual solo consta que varios testigos deponen de la fama pública que disfruta el reo, como salteador de caminos, declarando que este es autor de diversos asaltos y robos, y que ha pertenecido á las gavillas de Marcelo Valdivia y de Luis Buso; sobre lo cual es de advertir, que siendo singulares los testigos acerca de los hechos criminales que declaran, y no estando acreditado que las gavillas de Valdivia y Buso sean de malhechores, resulta que el peticionario no ha sido convicto, sino únicamente denunciado como salteador.

Considerando: que al imponérsale la pena de muerte, se ha infringido el art. 23 de la Constitución; porque no se ha justificado que el reo haya cometido alguno de los delitos que dicho artículo especifica y para los cuales con exclusión de otros, ha permitido la aplicación de la pena capital. Por tales consideraciones y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara:

1º Que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á Ventura Ortiz en el goce de las garantías que otorgan los arts. 20 y

21 de la Constitución, y que el quejoso cree violadas en su persona, con los procedimientos de la Jefatura Política de Purísima del Rincón.

2º Que la Justicia de la Unión ampara y protege al mismo Ventura Ortiz, contra la sentencia de muerte que la expresada autoridad pronunció contra él, en 19 de Abril de 1872.

Notifíquese este fallo á las partes; publíquese en el *Periódico Oficial*; y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales.

Así el C. Lic. Albino Torres, Juez de Distrito del Estado, juzgando definitivamente lo decretó y firmó. Doy fé. —*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico.

Guanajuato, 20 de Noviembre de 1874.  
—*Luis G. Medina*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero 17 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado del Distrito de Guanajuato por Ventura Ortiz, contra los procedimientos del Jefe Político de Purísima del Rincón, que lo ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte como salteador, aplicándole la ley de 18 de Mayo de 1871, con violación de las garantías que consignan los arts. 20, 21 y 23 de la Constitución Federal; y

Considerando: que en la causa instruida contra Ventura Ortiz, la cual obra en estas actuaciones, no existen las pruebas necesarias para poder considerar al quejoso como salteador de caminos.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 13 de Noviembre del año pasado, y se declara: que la Justicia de

la Unión ampara y protege á Ventura Ortiz, contra los procedimientos y sentencia del Jefe Político de Purísima del Rincón, quedando consignado el quejoso á la autoridad judicial respectiva.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—Certifico: que los CC. Ministros Juan J. de la Garza y Simón Guzmán, intervinieron en la votación de este amparo, y que por haberse ausentado de esta capital el primero, y estar imposibilitado de firmar el segundo por causa de enfermedad, no aparecen sus respectivas firmas en la anterior sentencia.

México, Abril 5 de 1875.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 5 de 1875.—*Enrique Landa*, Oficial mayor.

## CAUSA

*Instruida en el Juzgado de Distrito de Michoacan, contra D. José M. Portugal y D. Severiano Bernal, por el delito de peculado el primero y complicidad en el mismo delito el segundo.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

De las constancias de esta sumaria instruida contra D. José M. Portugal y D. Severiano Bernal, por el delito de peculado, aparece plenamente justificado que el primero como Administrador de rentas de la